

Dinámicas Territoriales en El Salvador: El rol de las coaliciones en la gobernanza del territorio.

: Dinámicas Territoriales Rurales: Claves para el desarrollo territorial

Ileana Gómez Galo¹

Resumen

Este documento aborda el rol de las coaliciones en las dinámicas territoriales de Chalatenango-Cerrón Grande y Bajo Lempa, El Salvador, caracterizados por su experiencia de organización comunitaria enfocada en la creación de alternativas para mejorar la pobreza y desigualdad, enfrentar la crisis económica y crear estrategias de adaptación frente al cambio climático. Las coaliciones territoriales les aportan capacidades para la construcción de propuestas de desarrollo endógeno para el mediano y largo plazo.

A pesar de sus esfuerzos se mueven dentro de los límites de la estructura económico-política sin superar las trampas de desigualdad y pobreza. Desde 2009 hay un escenario de posibles cambios por las políticas para el desarrollo territorial de la zona costera y la restauración de ecosistemas degradados.

Palabras claves: Dinámicas territoriales, Coaliciones territoriales, Gobernanza

El Contexto de las dinámicas territoriales: Cambio Económico y Cambio Climático

Entre 1978 y 2006 Centroamérica pasa de la agro-exportación tradicional a una mayor diversificación de actividades que incluyen la maquila industrial, el turismo, las exportaciones agrícolas no tradicionales, otras exportaciones de bienes y servicios y las remesas. En el caso de El Salvador la economía está dominada por el sector servicios que constituye el 60% del PIB, por su parte las remesas anuales, procedentes en su mayoría de Estados Unidos suman el 17% (USG-GOES, Análisis de Restricciones, 2011). Al contrario de lo que ocurre en el resto de Centroamérica, El Salvador es el país con baja inversión extranjera (CEPAL 2010). Existen ya en marcha acciones que buscan revertir esta tendencia. El gobierno salvadoreño en colaboración con el gobierno norteamericano busca crear mejores condiciones de inversión a partir de la iniciativa “Asocio para el Crecimiento” que ha sido la base para el rediseño de las políticas de cooperación norteamericana, incluyendo la gestión de importantes programas como el FOMILENIO II vinculado al desarrollo de la Franja Costera,².

Un país altamente vulnerable al cambio climático.

De todas las regiones tropicales Centroamérica es el punto más vulnerable al cambio climático³, con una alta probabilidad de que los eventos extremos tales como huracanes y tormentas tropicales se intensifiquen y aumenten su frecuencia. Este contexto amenaza con socavar las bases del desarrollo de esta región altamente expuesta y vulnerable debido a su condición socio-económica y la severa

1 Socióloga, investigadora principal Fundación Prisma. La autora agradece el apoyo de Oscar Díaz de la Fundación Prisma para la elaboración de los mapas presentados en este documento.

2 FOMILENIO II permitiría contar con un monto de unos US \$300 millones desembolsados por la Corporación Reto del Milenio. forma parte de la “Alianza para el Crecimiento (PFG), una alianza entre Estados Unidos y un grupo selecto de países, cuyo objetivo es acelerar y mantener un crecimiento económico de amplio alcance al aplicar los principios de la Directiva presidencial de políticas sobre desarrollo mundial emitida por el presidente Obama en septiembre de 2010.

3 Informe sobre El Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible 2010.

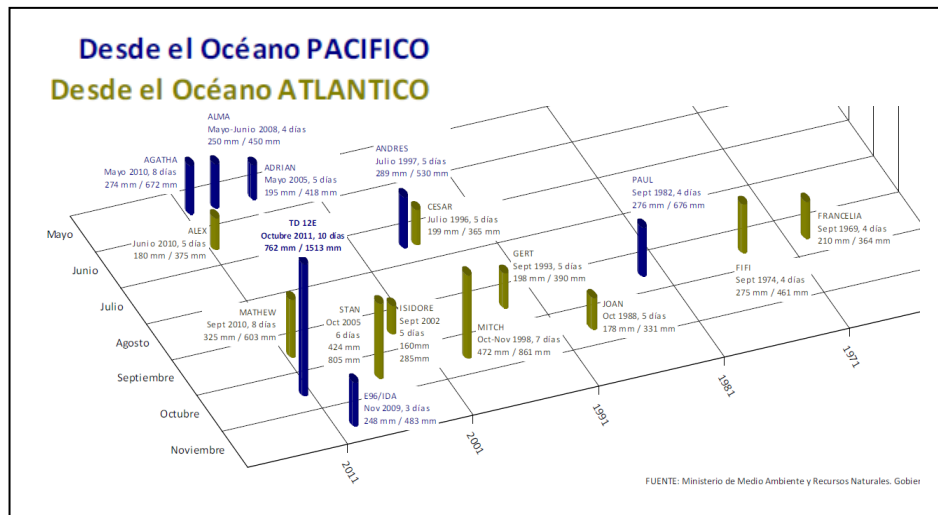
gradación de los agroecosistemas, siendo por esa razón la adaptación una prioridad clave⁴. El caso salvadoreño es uno de los más dramáticos de la región (ver cuadro 1).

Cuadro No. 1: Países de Centroamérica con alta vulnerabilidad basada en el riesgo económico de su PIB en dos o más amenazas.

País	Porcentaje total del área en riesgo	Porcentaje de población en áreas en riesgo	Porcentaje del PIB en áreas en riesgo
El Salvador	88.7	95.4	96.4
Guatemala	52.7	92.1	92.2
Costa Rica	51.9	84.8	86.6
Nicaragua	21.6	68.7	67.9
Honduras	19.0	56.0	56.5

Fuente: Countries with High Vulnerability Based on Economic Risk to GDP from Two or More Hazards, in IEG-World Bank, 2006.

Gráfico 1: Ciclones Tropicales y Sistemas de Baja Presión que provocaron Lluvias Torrenciales, 1961-2011 en El Salvador (Duración del Evento, Promedio Nacional de Lluvia Acumulada y Máxima Lluvia Acumulada en algún punto del país).



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de El Salvador, 2012.

A corto plazo la principal amenaza es el incremento de la frecuencia y cantidad de lluvia de los ciclones tropicales y sistemas de baja presión que llegan desde el Océano Pacífico (ver Gráfico 1). Si bien los esfuerzos gubernamentales y sociales han avanzado en estrategias de alerta temprana y atención a emergencias logrando disminuir las pérdidas de vidas humanas, los impactos han resultado en cuantiosos costos monetarios y sociales⁵ desviando la inversión pública hacia el manejo de la crisis repercutiendo en una mayor debilidad de las finanzas⁶.

⁴ Gutiérrez y Espinoza (2010), de acuerdo al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Tomado de <http://www.ipcc.ch/>, julio 2012.

⁵ Desde 2009 los 3 eventos del Pacífico: E96/Ida, Agatha y DT12E dejaron un total de 244 personas fallecidas y pérdidas por US \$1,300 millones, entre los impactos se cuentan los deslizamientos, desbordamiento de ríos y humedales, destrucción de puentes y pérdidas en la agricultura. (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Estrategia Nacional de Cambio Climático, 2003).

⁶ En la Política Nacional del Medio Ambiente 2012 se afirma “la amenaza climática creciente que enfrenta el país, producto del cambio climático global, es el hecho ambiental de mayor reconocimiento nacional“. Debido alcance nacional de esta

En este escenario, el reto del desarrollo en El Salvador combinaría tres elementos claves: territorio, inversión privada y enfrentamiento de las vulnerabilidades socioambientales especialmente las vinculadas al cambio climático. Lo cual incide notablemente en las apuestas territoriales y en las capacidades de los actores territoriales para tener un rol protagónico en la definición del uso de los recursos en el territorio.

Para los territorios rurales y sus actores supone implicaciones que tienen que ver con la forma en que los actores participan y se benefician de la gestión del riesgo, en la definición de las prioridades de reconstrucción de infraestructura pública y social, así como en la restauración de ecosistemas y paisajes claves para la reproducción de las familias y generación de ingresos, como parte de la adaptación al cambio climático. Estos elementos serán abordados más adelante.

1. Dinámicas Territoriales transformadoras en el norte y la zona costera de EL Salvador

En esta parte abordamos las principales dinámicas territoriales de índole socio económico de las zonas de estudio Chalatenango en el norte del país y el Bajo Lempa en la zona costera sur oriental.

2.1 Durante buena parte del siglo XX, el norte de El Salvador jugó un papel de complemento subordinado en el modelo agroexportador. Los campesinos de esta zona trabajaron como jornaleros en los cultivos de exportación o migraban a Honduras en la búsqueda de trabajo en las bananeras. Sin embargo, la zona norte ha proporcionado importantes recursos naturales para impulsar las agendas del desarrollo nacional, principalmente por la provisión de energía hidroeléctrica. Esto se ha traducido en la construcción de represas como el Cerrón Grande en los setenta.

En los setenta Chalatenango fue escenario del surgimiento de organizaciones campesinas que reclamaban acceso a la tierra, participación política y mejores condiciones de vida. Pronto se convierte en escenario de guerra, produciendo la desarticulación de la vida productiva y social, masivos desplazamientos de población y migración al extranjero. Posteriormente a los Acuerdos de Paz (1992) se iniciaron planes de reconstrucción social y productiva, distribución de tierras a excombatientes y proyectos para el fortalecimiento de gobiernos municipales apoyados con fondos de cooperación internacional y redes de solidaridad. Estas intervenciones atendieron necesidades básicas (vivienda, electrificación, sistemas de agua potable, etc.) sin lograr una articulación más estratégica que compensara el colapso de los medios de vida rurales tradicionales. En cambio contribuyeron a la generación de prácticas de diálogo y participación democrática para el abordaje de los problemas locales como salud, educación, medio ambiente y opciones productivas (Gómez y Cartagena, 2010).

A finales de los noventa el gobierno define una visión más estratégica de la zona Norte que identifica las principales potencialidades del territorio: recursos naturales y ruta de conectividad. La Comisión Nacional de Desarrollo plantea el proyecto de la Carretera Longitudinal del Norte (CLN), esta fue financiada a través de los fondos de la Corporación del Reto del Milenio (MCC) como parte de un programa para “reducir la pobreza en la Zona Norte a través del crecimiento económico”⁷. Le asigna al territorio un rol de tránsito que no está acompañado por medidas que permitan a las municipalidades ordenar los usos del territorio que se derivan de tal medida. De hecho se han comprobado la proliferación de lotificaciones, asentamientos irregulares y el establecimiento de zonas de abastecimiento para empresas de bebidas, gas etc. Todo este proceso se ve acelerado por la crisis del sector agrícola que ha hecho perder valor a las tierras productivas y el incremento de remesas que generan mayor demanda de terrenos para vivienda o servicios (Kandel y Cuellar, 2012).

problemática el Estado considera que “la degradación ambiental y la variabilidad climática son un freno para mejorar la calidad de vida y construir una economía robusta, competitiva, con capacidad de crecer y generar empleos de calidad”.

⁷ El programa Zona Norte es ejecutado a través de la organización FOMILENIO y consta de tres componentes: desarrollo humano, desarrollo productivo y conectividad vial. En este proceso quedaron por fuera los componentes de protección ambiental y desarrollo urbano (Berti, 2010: entrevista).

2.2 En la zona costera, el territorio conocido por el Bajo Lempa ha sido una zona clave para las dinámicas de agroexportación, desarrollo logístico y recientemente se vislumbra como una zona clave para el desarrollo del turismo receptivo.

La llanura costera era hasta las primeras décadas del siglo XX una zona de latifundios básicamente dedicados a la ganadería con algunas zonas selváticas (Montes, 1986). La gran transformación productiva de esta zona ocurre con el incremento del cultivo del algodón, que forma un sistema de monocultivo basado en grandes haciendas algodonerías que entra en declive a finales de los sesenta por la epidemia de la mosca blanca y el agotamiento de tierras, (Díaz, 2012).

Durante los ochenta la Reforma Agraria expropió estas grandes haciendas como una respuesta contrainsurgente ante la demanda de acceso a tierras de parte de organizaciones campesinas, las propiedades pasan a manos de las “cooperativas del sector reformado”. Pero el colapso de las haciendas y la pronta crisis de las recién formadas cooperativas disminuyen la actividad agrícola, quedando pequeños cultivos de subsistencia, permitiendo un descanso ambiental al territorio. (Díaz, 2012).

En los últimos años de la guerra la dinámica poblacional y productiva de la zona vuelve a cambiar notablemente cuando empiezan las repoblaciones colectivas, este proceso más la distribución de tierras a excombatientes y población civil organizada procedente de otras partes del país, reestructuraron el sistema de asentamientos humanos y productivos muchos de los cuales se construyeron sin considerar que se trataba de zonas de alta vulnerabilidad a inundaciones⁸.

Estos procesos sociales y económicos han repercutido en la forma en cómo la población y el territorio han sido afectados por los fenómenos naturales, planteando desafíos para el desarrollo local. La tormenta tropical Mitch (1998) provocó graves inundaciones afectando a una gran cantidad de familias, revelando con crudeza el problema de la vulnerabilidad de la población y la necesidad de tomar acciones para la mitigación de riesgos.

A pesar de su vulnerabilidad socio-ambiental el Bajo Lempa es una zona de gran importancia ambiental. La Bahía de Jiquilisco fue declarada sitio RAMSAR y Reserva de la Biosfera, lo que ha significado inyección de fondos de la cooperación internacional, y la presencia de organizaciones que trabajan el tema ambiental, también ha incidido en la definición de criterios de ordenamiento del territorio y en el manejo de conflictos (Díaz, 2012).

A partir de 2009 hay una nueva valoración del territorio desde las políticas nacionales de desarrollo. La franja costera constituye la principal apuesta gubernamental para dinamizar productivamente al país y atraer inversiones. El diseño más amplio de esta propuesta lo constituye la Estrategia de Desarrollo de la Franja Costero-Marina que tiene como factor central al mar en su función de eje articulador del desarrollo⁹,

3.1 Las coaliciones territoriales de Chalatenango-Cerrón Grande y Bajo Lempa.

Uno de los elementos característicos de la dinámica territorial en estos dos casos es la creación de coaliciones como espacios de confluencia de actores que permiten la definición de estrategias de mediano y largo plazo, la incidencia en políticas y el manejo de conflictos socioambientales, esta dinámica está presente en Chalatenango-Cerrón Grande y en Bajo Lempa.

⁸ Estas inundaciones son producidas por una compleja combinación de factores como la dinámica del río Lempa, las características geomorfológicas de la zona y las descargas de la presa hidroeléctrica 15 de Septiembre, el deterioro de los sistemas de drenaje y el proceso de deforestación. Esta condición ha sido agravada por la forma en que se establecen los asentamientos de población y la distribución y producción de la tierra desde los años ochenta.

⁹ La Estrategia implica la implementación de tres componentes: 1) transformación productiva (reactivación de la agricultura y agroindustria, la integración de los mercados locales), el desarrollo de una plataforma logística y el acceso a los mercados internacionales; 2) gente con igualdad de oportunidades, a través del incremento de los ingresos familiares; y 3) reducción de la vulnerabilidad social y ambiental, privilegiando la conservación y recuperación de los ecosistemas costero-marinos para asegurar su mejor aprovechamiento.

De acuerdo a los resultados del Programa Dinámicas Territoriales el concepto operativo de Coalición es *“la acción convergente de un conjunto de diferentes actores en torno a una dinámica territorial de desarrollo, que se ubica en un horizonte temporal de mediano y largo plazo”* (Fernández et al 2012). Esta definición que enfatiza dos elementos clave para identificar el tipo de coaliciones que pueden impulsar cambios positivos en el ámbito rural latinoamericano. a) su carácter territoriales, en la medida que su marco de referencia es un territorio considerado como “un espacio geográfico y social concreto con un tejido de relaciones sociales y acuerdos institucionales específico“ con particularidades propias pero que no limita sus relaciones a sus ámbito territorial y b) su carácter transformador, ya que “su acción apunta a generar cambios en las dinámicas económicas, sociales o políticas de dichos territorios, ya sea mediante cambios institucionales o mediante la generación de nuevos sentidos comunes, que a medio y largo plazo sirvan de sustento a futuras transformaciones” (Fernández et al 2012).

Visto así las coaliciones expresan la capacidad del capital social territorial de articular a diferentes sectores en función de intereses comunes, que se sobreponen a las diferencias ideológicas partidarias, aunque no las eliminan. En Chalatenango las coaliciones han abordado problemas críticos en torno a los medios de vida para asegurar la base de reproducción de una población que tenía que reinsertarse en un territorio afectado por la guerra y la desarticulación de los sistemas productivos tradicionales. Las coaliciones lograron canalizar fondos de cooperación y solidaridad, han sido contraparte de programas y proyectos territoriales; también han definido una visión de territorio que lo articula a la dinámica económica y ambiental nacional (Gómez y Cartagena, 2010 y Fernández et al 2012).

En el Bajo Lempa la experiencia ha estado estimulada por la existencia de problemáticas comunes vinculadas a dinámicas productivas y a la gestión del riesgo en un territorio cuya población, además de compartir una historia común, articula su producción y reproducción sobre la base de recursos naturales relevantes al nivel nacional. Las coaliciones se constituyen en un actor referente para la construcción de propuestas de desarrollo territorial que se insertan en las agendas nacionales, y para la negociación e incidencia en temas claves como la gestión del riesgo y la transformación de las prácticas agroindustriales del cultivo de caña de azúcar.

Examinamos el devenir y capacidades de acción colectiva de estas dos coaliciones:

La Coalición Chalatenango-Cerrón Grande

Chalatenango es un territorio pionero respecto al surgimiento de coaliciones territoriales. En 1995 emerge el Comité Ambiental de Chalatenango (CACH) una plataforma de intercambio y foro de coordinación entre las diferentes fuerzas políticas, quienes recuperan el tema ambiental y la apropiación de los recursos del territorio como eje dinamizador del desarrollo (Gómez y García, 2002). El CACH forma un nuevo tipo de institucionalidad que a partir de la construcción de mecanismos de concertación y de manejo de conflictos básicamente socioambientales.

La coalición ha definido una propuesta de desarrollo territorial que reivindica el rol del territorio como proveedor de agua y energía¹⁰. La protección de recursos naturales, vinculados a la producción agropecuaria y la diversificación de los medios de vida de la población, ha sido uno de los ejes centrales de la acción colectiva del territorio. De allí que la recuperación y conservación de suelos y la protección de los recursos hídricos de los ecosistemas se hayan convertido en áreas de acción prioritaria. (Cartagena, 2010)

El CACH logró articular una visión del desarrollo del territorio, presentado en el Plan Departamental de Manejo Ambiental (PADEMA), desarrollado por los actores sociales de Chalatenango es un

¹⁰ El gubernamental programa Plan de Nación definió cinco territorios alrededor de sus distintas “vocaciones”. Chalatenango fue incorporado a la “Zona Norte”, reconociendo su papel en la sostenibilidad ambiental del país, como región proveedora de agua y energía, tal como lo había reivindicado CACH en el Plan Departamental de Manejo Ambiental PADEMA (Gómez y Cartagena, 2010).

esfuerzo de investigación social, económica y ambiental, consultado y validado ante la población y sus formas de representación comunitaria o gremial. Representa el proyecto de desarrollo del territorio a largo plazo y es un ejercicio inédito en la construcción de propuestas desde los actores sociales.

El PADEMA reivindica el rol del departamento como proveedor y garante de servicios ambientales para el país. Estas inquietudes nunca llegaron a producir una política que retribuya a Chalatenango por su papel en la protección de los servicios ecosistémicos. Pero al interior del territorio sí se logró aportar a la definición de una base institucional para la gestión ambiental.

Para las pequeñas municipalidades que manejan pocos fondos para su desarrollo local, la pertenencia a estos espacios territoriales ha sido importante en tanto permite vincularse a programas nacionales de desarrollo territorial y manejo de recursos naturales como el Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP)¹¹. Un ejemplo es el caso de la municipalidad de Las Vueltas, este pequeño municipio participa en estrategias nacionales no en forma aislada sino como parte de un territorio clave para iniciar acciones de restauración para la recuperación de la resiliencia de los ecosistemas en un contexto de cambio climático.

Otra de las acciones conjuntas que toman la forma de coalición se desarrolla alrededor de la gestión del Humedal Cerrón Grande, este Humedal, formado por la construcción de la Represa del mismo nombre ha sido socialmente pensado como un ecosistema proveedor de bienes y servicios ecosistémicos, que incluye provisión de energía hidroeléctrica, control de inundaciones, depuración de aguas, pesca, agricultura, turismo y biodiversidad. El Comité Interinstitucional del Humedal Cerrón Grande (CIHCG) ha ido construyendo una nueva visión sobre este recurso compartido, promoviendo el manejo sostenible de los recursos naturales. Sus acciones han contado con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a partir de lo cual logra convertirse en un Sitio de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar.

Las coaliciones en Chalatenango-Cerrón Grande han podido insertarse en las agendas nacionales para la gestión de ecosistemas claves para la dinamización productiva y la conservación de importantes recursos. Son interlocutores indispensables para los programas de desarrollo con enfoque territorial, sin embargo los resultados en términos de la dinamización productiva siguen siendo inciertos

La Coalición Bajo Lempa

En el Bajo Lempa, la formación de coaliciones comenzó con la necesidad de articular actores alrededor de la gestión del riesgo después de las inundaciones producidas por el Huracán Mitch a finales de 1998¹², estas acciones contribuyeron a fortalecer los mecanismos de alerta temprana y la atención a la emergencia, logrando reducir sustantivamente las víctimas mortales por desastres.

En 2010 se abre una nueva fase de la coalición territorial, aprovechando la llegada al gobierno central del partido FMLN que cuenta con una amplia base social en la zona. Las municipalidades de Tecoluca, Jiquilisco y Zacatecoluca y varias organizaciones sociales que representan expresiones de base local forman la Mesa Permanente de Actores de Bajo Lempa (MESPABAL), cuya agenda se orienta prioriza la definición de una estrategia de desarrollo propia para vincularse a la Estrategia de Desarrollo de la Franja Costero Marina¹³. La coalición ha tenido capacidad de incidencia frente al

¹¹ Otros programas han sido la Estrategia Nacional de Desarrollo (2002) de la Comisión Nacional de Desarrollo y Programa Nacional de Manejo de Desechos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

¹² Se forma el Comité Local del Bajo Lempa compuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como coordinador y dos organizaciones locales, la Fundación CORDES en la margen occidental y La Coordinadora del Bajo Lempa – Bahía de Jiquilisco/Asociación Mangle en la margen oriental del río Lempa

¹³ MESPABAL es el referente territorial para la articulación de las políticas nacionales en esta zona, entre estas El Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes que es parte de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Estrategia para el Desarrollo de la Franja Costero Marina y el segundo programa FOMILENIO II, financiado con fondos del gobierno de los Estados Unidos a través de la Corporación para el Reto de Milenio o MCC.

gobierno central y ha colocado sus propuestas en programas de relevancia como FOMILENIO II, enfocado en la dinamización de las inversiones en la franja costero-marina.

La coalición es también un espacio para la negociación de conflictos de índole socio ambiental, específicamente por la contaminación y degradación de recursos producida por el cultivo de caña de azúcar. En la zona el Movimiento por la Defensa de los Recursos y la Vida Humana, formado por los pobladores y organizaciones de base, ha realizado acciones de protesta y campañas de sensibilización para el cese de las fumigaciones y la quema de la caña, estas han permitido la formación de una agenda entre MESPABAL y los empresarios cañeros que busca generar cambios en las prácticas agroindustriales de este cultivo, complementando las acciones coordinadas que han estado realizando los ministerios de medio ambiente y de agricultura y ganadería para la introducción de la zafra verde con los grandes ingenios.

Acciones coordinadas para la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgo

La experiencia organizativa acumulada en el Bajo Lempa y la capacidad de los actores para conformar coaliciones territoriales han permitido acciones coordinadas para la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo que se vuelven centrales para hacer frente al cambio climático, comenzando por el establecimiento de un sistema de alerta temprana (pronósticos, monitoreo, establecimiento de estaciones de observación climática) y la atención a emergencias han evitado la pérdida de vidas humanas. De los planes de alerta temprana se ha evolucionado a programas de desarrollo donde la planificación social y productiva es parte de una visión integral de gestión del riesgo. Basados en la capacidad de organización local, a través del establecimiento de sistemas de cooperación, redes de ayuda mutua, enlaces estratégicos con organizaciones que proveen tecnología, formación y canalizan fondos financieros, se han promovido acciones concretas para la adaptación al cambio climático como la introducción de tecnologías y prácticas agrícolas para prevenir épocas de sequía, cultivos adaptados a los meses críticos del invierno, sistemas agroforestales y agricultura orgánica así como los esfuerzos por la recuperación de manglares, la modificación de viviendas y reforzamiento de bordas (Rosa, Cuellar y Gómez, 2002 y Aguilar et al 2005).

4 Conclusiones

La fortaleza de estos casos para enfrentar el contexto adverso de pobreza y vulnerabilidad socio ambiental está en su capital social y en las estrategias que este construye para mejorar otros activos como acceso a recursos naturales, capital humano o infraestructura. Entre estas estrategias se encuentra la creación de un sistema de apoyos de carácter técnico y político a través de la vinculación con organizaciones no gubernamentales, redes o movimientos sociales que aportan prácticas innovadoras, por ejemplo para la producción agrícola sustentable y las relaciones de género. La pertenencia a coaliciones territoriales les aporta a la posibilidad de construir una visión territorial de largo plazo y una mayor fortaleza para la incidencia en políticas nacionales fundamentales para avanzar en la mejora de sus estrategias de vida y desarrollo productivo.

En estos territorios las políticas de reconstrucción y redistribución de tierras, posteriores a los Acuerdos de Paz, además de las políticas locales para participación ciudadana, gestión del riesgo y fortalecimiento de capacidades han creado un entorno de seguridad y arraigo vinculado a la certidumbre del acceso a recursos y control de las decisiones de la política local, que configura su estilo de gobernanza.

Sin embargo, se trata de experiencias que se mueven en un contexto de dinámicas territoriales que reproduce los límites de la estructura económico-política sin salir de las trampas de pobreza. A partir del 2009, la articulación de estas localidades y territorios con las políticas nacionales para la adaptación al cambio climático (restauración de ecosistemas y paisajes) y para el desarrollo territorial de la zona

costera podría abrir una nueva generación de opciones de mejora de condiciones de vida, pero también nuevas estrategias de participación ciudadana en la implementación de la política pública desde el territorio.

Referencias

- Aguilar, Y., Rodríguez E. y Tobar, J. (2005) “Conceptualización y evaluación integrada de la vulnerabilidad climática de las estrategias de vida rurales en el Bajo Lempa”. MARN, SNET, Coordinadora de Bajo Lempa y CORDES. San Salvador.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2012). “El Salvador. Programa integral de sostenibilidad fiscal y adaptación al cambio climático para El Salvador”. Propuesta de Préstamo. Washington DC.
- Cartagena R., (2010). “Análisis de la institucionalidad que incide en la dinámica social, económica y ambiental del territorio municipalidades de la ribera norte del Humedal Cerrón Grande”. Fundación Prisma. San Salvador.
- Cuéllar, N., Luna, F., Díaz O. y Kandel, S. (2012). “Informe El Salvador: Políticas públicas sobre cambio climático y desarrollo”. PRISMA, San Salvador.
- Díaz, O. (2011) “La evolución del rol territorial de la Bahía de Jiquilisco”. Fundación PRISMA, San Salvador.
- Dimas, C. (2000), “Civil conflict and Social Capital Formation: Starting the Grassroots, Case Studies of three rural Salvadoran communities”. Tesis presentada a la Division of Public Administration, the Graduate of International Christian University, Tokyo, para el Grado de Doctor en Filosofía.
- Fernández, I., Hernández, R., Trivelli, C. y Schejtman, A. (2012). “*Las coaliciones transformadoras y los dilemas del desarrollo inclusivo en las zonas rurales de América Latina*”. Documento de Trabajo N° 107. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.
- Gómez, I., Escobar, E. y Cartagena, R, (2012). “La gobernanza territorial de los recursos naturales Desigualdad, prácticas institucionales y potenciales de transformación en el Paraíso-Tejutla, Chalatenango El Salvador”. Documento de Trabajo Programa Dinámicas Territoriales. San Salvador.
- Gómez, I. y Cartagena R. (2010). “Dinámicas socio ambientales y pro-ductivas en la zona Norte de El Salvador: La ribera norte del Humedal Cerrón Grande”. RIMISP, Programa Dinámicas Territoriales.
- Gómez, I., García, M., Kandel, S., Rosa, H. y Díaz, O. (2002) “Capital social, estrategias de vida y gestión ambiental en El Salvador: El caso de la Mancomunidad La Montañona, Chalatenango”. Cuaderno, Prisma, San Salvador.
- Gutiérrez M.A, y Espinosa T. (2010). “Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático Diagnóstico inicial, avances, vacíos y potenciales líneas de acción en Mesoamérica”. BID. Notas Técnicas. Washington.
- Kandel S. y Cuellar N. (2012). “Dinámicas migratorias, estrategias de vida rurales y desafíos para la gestión territorial”. En Lecciones desde El Salvador, Hecht, S., Kandel, S., y Morales, A., Eds. *Migración, medios de vida rurales y manejo de recursos naturales*”. IDRC-CRDI y PRISMA, San Salvador.
- IEG-World Bank (2006). “Hazards of nature, risk to development”. An IEG evaluation of World Bank assistance for natural disasters. Washington DC.
- MARN, BID (2003a). “Programa de fortalecimiento de las organizaciones locales y comunitarias en el Bajo Lempa. Informe Final”. San Salvador.

- MARN, BID (2003b), “Programa de fortalecimiento de las organizaciones locales y comunitarias en el Bajo Lempa. Lecciones Aprendidas”. San Salvador.
- MARN (2012) “Presentación del Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes”. Presentación Power Point. San Salvador.
- MARN (2012) “Política Nacional de Medio Ambiente 2012”. San Salvador.
- MARN (2012b) FOMILENIO II. “Evaluación Ambiental Estratégica. Informe no. 2. Exploración de alternativas: pesca, agroforestería y turismo. Sobre la base de la restauración y aprovechamiento inclusivo y sostenible de los ecosistemas y recursos costero-marinos”. San Salvador
- Montes, S. (1986). *El agro salvadoreño (1973 – 1980)*. UCA editores. San Salvador
- PNUD (2005). “Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2005 (IDHES): Una mirada al nuevo Nosotros. El impacto de las migraciones”, San Salvador.
- Rodríguez, E. y Gómez, I. (2003). “Bajo Lempa: del reasentamiento y los desastres a la gestión territorial, en Rosa y otros” en *Gestión territorial rural: enfoque, experiencias y lecciones de Centroamérica*, Cuaderno PRISMA
- Rosa H. (2008), “Perfiles y trayectorias del cambio económico en Centroamérica. Una mirada desde las fuentes generadoras de divisas”. PRISMA. San Salvador.
- Rosa H., Cuellar N., Gómez I. (2002). “Dimensiones ambientales de la vulnerabilidad en El Salvador. El caso del Bajo Lempa”. PRISMA. San Salvador.
- Shelley, B. (2005). *But, What about the Peasant Farmers? Compensation for Environmental Services as a Strategy for Rural Development in El Salvador*. Department of Economics, University of Massachusetts at Amherst. Mimeo.
- World Bank, (2005). “Natural disaster hotspots: A global risk analysis”. Disaster Risk Management Series No. 5. Hazard Management Unit. Washington DC.